ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
(2012). *DERECHOS FUNDAMENTALES*. LIBRO
HOMENAJE A FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA.
EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE. 575 PÁGINAS

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Talca

La Asociación Chilena de Derecho Constitucional mediante este nuevo libro titulado “Derechos Fundamentales”, dedicado a don Francisco Cumplido Cereceda, uno de los asociados fundadores, como un sentido homenaje a uno de sus académicos más distinguidos, por toda una larga trayectoria de vida dedicada a la academia y al servicio público, desarrollando significativos aportes desde ambas perspectivas.

No es fácil resumir la extensa trayectoria de don Francisco, pero podemos enunciar algunos de los aspectos más destacados de su vida académica, ya que el mismo ha desarrollado dos obras autobiográficas como son sus libros *Cristiano, demócrata y académico* y *Gracias a Dios*, en que relata pasajes significativos de su vida desde su juventud.

Don Francisco estudió su enseñanza secundaria en el Instituto Nacional, luego estudio su carrera de Derecho en la Universidad de Chile.

Su tesis de grado la concreta en Teoría de la Constitución en 1956, donde plantea ya la idea de crear en Chile un tribunal constitucional, lo que se concretará luego en la reforma de 1970. Don Francisco fue ayudante del profesor Gabriel Amunátegui. Luego de recibirse de abogado en 1957, a partir de 1958 desarrolló actividad como docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, siendo nombrado Profesor de Derecho Constitucional en esa casa de estudios por concurso y oposición en 1962, donde desarrollo distintas responsabilidades, entre ellas la de Director del Instituto de Ciencias Políticas, desarrollo diversas investigaciones que dieron lugar a significativas publicaciones. En 1970 fue nombrado Director de la Comisión de Investigación Científica y tecnológica (CONICYT). En 1972 fue elegido Secretario General de la Sede Santiago Norte de la Universidad de Chile, cargo que desempeñó de 1972 a 1976.

Entre 1970 y 1977 fue, asimismo, Investigador de FLACSO dirigiendo diversas investigaciones colectivas, desarrollando sus líneas de investigación en régimen político; ley y sociedad; las funciones del derecho en el cambio social.

En 1978 se encuentra entre los creadores del Grupo de Estudios Constitucionales (Grupo de los 24), desempeñándose como su Secretario Técnico, el cual analizó y elaboró un texto de Constitución y legislación complementaria, alternativo al del régimen autoritario militar, el que luego sería utilizado a partir de 1990 para realizar diversas reformas constitucionales.

Desde 1979 a 1987 concentra sus investigaciones en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos sobre problemas jurídicos de la transición del autoritarismo a la democracia.

Entre 1979 y 1990 se desempeña como abogado de la FAO en Chile.

Desde 1987 a 1989 es elegido director del Colegio de Abogados de Chile.

Desde 1983 hasta 1990 combina sus actividades profesionales, de investigación y gremiales con la actividad docente, como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, siendo distinguido con el premio al profesor más destacado por el centro de alumnos de dicha Universidad en 1990.

En 1990 es llamado por el Presidente electo don Patricio Aylwin para asumir el cargo de Ministro de Justicia, el que ejerció durante todo el primer gobierno democrático hasta marzo de 1994, concretando importantes modificaciones legislativas conocidas como las “Leyes Cumplido”, como, asimismo, significativas reformas relacionadas con el Poder Judicial. Durante su gestión recibió diversas distinciones, entre las cuales se cuenta el “Premio Nacional de Derechos Humanos”, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en 1993, como la Condecoración del Gobierno de Austria por la Defensa de los Derechos Humanos en 1994.

En 1994 y 1995 volverá a la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Recuperada la democracia, volverá a la Universidad de Chile como su Secretario General en el periodo 1995 – 1998, recibiendo en 1996 la Condecoración Medalla Andrés Bello de la Universidad de Chile.

Más tarde será nombrado Rector de la Universidad Miguel de Cervantes hasta 2010, dejando en este último año la rectoría, siendo distinguido con un Rectorado Honoris Causa.

Desde hace algunos años tomó la decisión con su señora y compañera de toda la vida, Alicia García Valdés, de vender su departamento de Providencia, para irse a vivir al campo, a Cuncumén, donde había comprado su parcela y

construido su nueva casa, donde ambos se dedican al cultivo de almendros, desde donde realiza semanalmente su escape a algunas actividades académicas o profesionales a Santiago.

PASEMOS AL CONTENIDO DEL LIBRO HOMENAJE QUE PRESENTAMOS HOY

El libro cuenta con 18 trabajos académicos nacionales y cinco trabajos de autores del derecho constitucional latinoamericano en 575 páginas, el cual ha sido editado por la Editorial Jurídica de Chile, la que una vez más nos acompaña en el desarrollo de la colección de libros homenajes a los más destacados constitucionalistas chilenos.

Los académicos del ámbito nacional que quisieron estar presentes a la obra homenaje a don Pancho, como lo identificamos con respeto sus amigos y colegas, son Víctor Manuel Avilés H.; Rodrigo Bustos B.; Kamel Kazor A.; Miguel Ángel Fernández G.; Liliana Galdámez Z.; Ana María García B.; Tomás Jordán D.; Enrique Navarro B.; Humberto Nogueira A.; Marisol Peña T.; Emilio Pfeffer U.; Jorge Mario Quinzio F.; José Antonio Ramírez A.; Teodoro Rivera N.; Lautaro Ríos A.; Jorge Tapia V.; Mario Verdugo M., y Francisco Zúñiga U.

Los académicos latinoamericanos que quisieron estar presentes en este homenaje con sus artículos son *Allan Brewer-Carías*, Profesor de Derecho Público de la Universidad Central de Caracas, Venezuela; Premio Nacional de Ciencias y ex Ministro de Estado; Doctor Honoris Causa de la Universidad de Granada y Carlos III de Madrid, con la obra escrita de derecho público más extensa y de mayor calidad de Venezuela; *Jorge Carpizo*, recientemente fallecido hace un mes, producto de un shock alérgico en la etapa previa de una cirugía menor en Ciudad de México, académico, investigador, ex Rector de la UNAM; ex Comisionado de Derechos Humanos, ex Ministro de Gobernación de México; ex Embajador de México en Francia, y Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. *Francisco José Eguiguren P.*, Presidente de la Asociación Peruana de derecho Constitucional, ex Ministro de Justicia del Perú y actual Embajador del Perú en España; *Martín Risso F.*, Constitucionalista uruguayo, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay; *Néstor Pedro Sagüés*, destacado constitucionalista, autor de numerosas obras de derecho constitucional y procesal constitucional en Argentina e Iberoamérica, ex Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y actual Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

La gran mayoría de los artículos publicados se encuentran centrados en el ámbito de los *Derechos Fundamentales*, como *pilar estructural esencial del desarrollo y perfeccionamiento de la democracia constitucional contemporánea*, como *asimismo diversas reflexiones sobre las deficiencias que presente nuestro diseño institucional sobre la materia y la necesaria reforma constitucional o el eventual establecimiento de una Constitución del Bicentenario*.

Podemos partir estas consideraciones sobre el contenido de este libro homenaje con el artículo del profesor *Mario Verdugo*, el que reflexiona sobre la evolución en nuestro derecho constitucional positivo de la inadecuada denominación de garantías constitucionales hasta el actual Capítulo III de la Constitución que se denomina “Derechos y Deberes constitucionales”, que si bien utiliza correctamente la expresión derechos para reconocer los atributos o facultades de las personas y algunos deberes, olvida las garantías constitucionales como los medios idóneos de carácter constitucional para asegurar y dotar de eficacia a los derechos, reconociendo la inadecuada identificación de las garantías constitucionales con las garantías jurisdiccionales, olvidando las garantías generales de los derechos y las específicas de carácter normativo, de interpretación e institucionales, sobre las cuales existen un déficit significativo en nuestro sistema institucional, bastando para ello sólo un poco de información comparativa constitucional.

El artículo del profesor *Lautaro Ríos* centra su atención en la *ausencia de nuestro texto constitucional de una cláusula de derechos implícitos*, a diferencia de ocurre casi en todo el derecho comparado latinoamericano, dicha cláusula en el derecho constitucional comparado está destinada a desvirtuar la creencia de que sólo los derechos explícitamente contenidos en el texto constitucional se garantizan, sin perjuicio del artículo 5º inciso segundo, que remite a una gama más amplia de derechos en forma indirecta a través del derecho internacional convencional de derechos humanos ratificado y vigente. Asimismo, también centra su preocupación en la ausencia de garantía jurisdiccional de diversos derechos fundamentales por la acción de protección, que es el medio idóneo para ello. Agreguemos, por nuestra parte, que este es un punto central que debiera llevar a una reforma constitucional que perfeccione nuestro sistema de derechos fundamentales y potencie su garantía jurisdiccional, conforme a la obligación asumida por el Estado de Chile en virtud del artículo 25 de la CADH.

Por mi parte, analizo el *bloque constitucional de derechos y el control de convencionalidad*, el sistema de doble fuente de los derechos contenido en

el artículo 5° inciso segundo, la necesaria consideración de los atributos y garantías de los derechos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de la norma de reenvío del artículo antes señalado, los cuales obliga a considerarlos como parte del parámetro de control de constitucionalidad, todo ello, sin perjuicio de no confundir el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad que deben ejercer todos los jueces nacionales protegiendo los estándares mínimos del corpus iuris interamericano, de acuerdo a los artículos 1° y 2°, 29, de la CADH al ser todo juez nacional en cuanto juez interamericano, siendo la Corte IDH sólo el juez subsidiario final del sistema, como jurisdicción vinculante obligatoria, posibilitando al juez nacional abrir un diálogo jurisdiccional ascendente con la CIDH, en la perspectiva de la mejor protección de los derechos, teniendo como principio interpretativo básico el *pro homine* o *favor persona*, lo que se ve reflejado muy tímidamente en la jurisprudencia de la judicatura ordinaria y constitucional.

Martín Risso, analiza el *Bloque de Derechos en la Constitución Uruguaya*, considerando la norma constitucional de los derechos implícitos contenida en el artículo 72 de la Carta Fundamental que posibilita el ingreso de los atributos de los derechos humanos contenidos en las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, lo que la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia reciente asume como bloque constitucional de derechos, analizando la doctrina emanada de la sentencia de la Corte Suprema N° 365 de 19 de octubre de 2009. El autor postula para los tribunales de su país la doctrina del seguimiento de los fallos de la CIDH y la interpretación conforme del derecho interno con los atributos de los derechos humanos contenidos en el derecho convencional internacional, desde el bloque constitucional de derechos, con un limitado margen de apreciación nacional.

Ana María García B., a través del análisis de *nuevos derechos* reconocidos por vía jurisprudencial del Tribunal Constitucional, como es el caso del *derecho a la identidad*, hace evidente el déficit de nuestro texto constitucional en la materia, que obligan a desarrollar por vía jurisprudencial constitucional y normas de reenvío al derecho convencional internacional, derechos fundamentales de los cuales no hay rastros en nuestro ordenamiento constitucional formal. Al análisis del derecho a la identidad podríamos agregar el derecho a la propia imagen, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a constituir una familia; los atributos adecuados del derecho al debido proceso, para sólo señalar ejemplos evidentes

de nuestras carencias constitucionales, sin perjuicio, de los déficits en materia de derechos sociales.

En este ámbito de la carencia de estándares de derechos explícitamente asegurados en sus atributos y garantías fundamentales, *Marisol Peña T.*, se refiere a la *jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de debido proceso*, haciendo mención a la necesidad de aludir a la convergencia del artículo 5º, inciso 2º, modificado en la reforma de 1989, con las obligaciones derivadas de los artículos 1º y 2º de la CADH, respecto del debido respeto y garantía de los derechos asegurados por vía convencional internacional y la necesaria adecuación por vía de medios legislativos y de otro carácter de nuestro ordenamiento jurídico, donde la vía de *medios de otro carácter*, implica, agrego, el uso de la potestad jurisdiccional del Estado juez para hacer respetar y garantizar los derechos, pudiendo hacer efectivo el ejercicio del control de convencionalidad al cual ya hemos aludido. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una adecuada labor de extraer, vía interpretación, de la interrelación del artículo 19 N°s. 3 y 76 de la Constitución y los artículos 8º de la CADH y 14 del PIDCyP de NU sobre garantías judiciales, en cuanto bloque de derechos esenciales e interpretadas conforme al principio favor persona, el derecho a la jurisdicción, el principio *pro actione*, la existencia de un tribunal independiente e imparcial, la legalidad del tribunal, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, el debido emplazamiento, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la igualdad de armas y la bilateralidad de la audiencia, al derecho a probar, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; la revisión del fallo por un tribunal igualmente independiente e imparcial, a los cuales puede agregarse, el derecho a una sentencia fundada, congruente y basada en las fuentes del derecho vigente; el derecho a una sentencia en plazo razonable, el principio *non bis in idem*, entre otros. Estándares mínimos que consideramos que debieran estar asegurados expresamente en el texto constitucional.

El profesor *Néstor Sagüés* en su artículo desarrolla el *derecho a ser oído por la jurisdicción interamericana*, analizando los casos “Bulacio” y “Kimmel”, dos casos argentinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando el diálogo entre la Corte suprema Argentina y la Corte Interamericana en el caso “Bulacio”. El autor concluye que la reforma al Reglamento de la Corte Interamericana permite a las víctimas de violación de derechos, como a sus representantes, formular solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma frente a la Corte, sin perjuicio, de que se establece también

la figura del *amicus curiae*, todo lo cual antes no se podía concretar, teniendo presente en todo caso, que el amparo interamericano es un proceso en contra del Estado Parte del sistema interamericano, donde las partes son distintas del proceso interno. El autor aboga, finalmente, por la necesidad de que las personas que puedan ser afectadas por un fallo de la CIDH puedan tener acceso al procedimiento ante la CIDH aunque ellas no sean técnicamente partes del proceso.

A su vez, dos trabajos versan sobre derechos sociales.

El primero de Rodrigo Bustos centra su atención en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a seguridad social y el derecho a la libertad de trabajo y justa retribución y sus déficit respecto de los estándares establecidos por el PIDESyC de Naciones Unidas, la necesidad del respeto por el contenido esencial de tales derechos, como también lo establece el art. 19 N° 26, el reconocimiento de su fuerza normativa y su eficacia directa, como su ausencia de protección por el Recurso de Protección. El autor analiza como es posible ante las carencias de su protección directa el desarrollo de su protección indirecta a través de otros derechos fundamentales y el importante rol desempeñado por el Tribunal Constitucional en la materia, sin perjuicio de promover el aseguramiento en el texto formal de la Constitución de un mejor estándar de tales derechos y ampliar el Recurso de Protección en la materia, lo que agrego por mi parte, es una obligación incumplida para el Estado chileno contenida en el artículo 25 de la CADH.

El segundo del profesor, Tomás Jordán, señala que los derechos fundamentales concretan un modelo de Estado y la eficacia de los derechos, incluyendo los derechos sociales en el nivel constitucional tienen una relevancia sustancial, pasando revista a las diversas aproximaciones en la materia para afirmar, en definitiva, la bidimensionalidad (libertad/prestación) y la eficacia material de los derechos sociales, que constituyen instrumentos de igualación y superación de desigualdad factuales, potenciando las posibilidades de desarrollo del conjunto de la sociedad.

Por su parte, el profesor Jorge Tapia V., se detiene en una reflexión sobre el derecho al desarrollo como derecho humano inalienable contenido en la Resolución N° 41/128 de 1986 de la Asamblea General de Naciones Unidas e incluida en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 que lo ratifica como derecho humano fundamental en su numeral 10, el que se sitúa como puente y vínculo entre los derechos individuales y los derechos colectivos y sociales. El autor aboga por su carácter de derecho implícito en el artículo

1º inciso cuarto y quinto, referentes a la creación de las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad su mayor realización material y espiritual posible, como asimismo el deber del Estado de promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y la de promover la igualdad de oportunidades para participar en la vida nacional”, como, asimismo, en el art. 3º que establece que los órganos del estado promoverán ... “el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias y comunas del territorio nacional” y la búsqueda de un “desarrollo territorial armónico y equitativo” al que se refiere el artículo 115 de la Constitución. El autor analizando las relaciones del mundo globalizado actual considera que para que en América Latina se manifieste una relación positiva entre el derecho por una parte y el desarrollo económico y democrático, por otra parte, es necesario un Estado fuerte capaz de liderar el proceso a través de una definición democrática de bien común y la lucha por humanizar la globalización, lo que requiere de una toma de conciencia también de los empresarios globalizados de respetar los derechos de las personas y la democracia.

El profesor Enrique Navarro analiza la acción de indemnización por error judicial y su evolución en el sistema constitucional chileno hasta el presente, como, asimismo, pasa revista al derecho comparado y a los tratados de derechos humanos que la contienen como son la CADH, en su artículo y el PIDCyP de NU en sus artículos 9º inciso 5º y 14 Nº 6. El autor analiza los casos jurisprudenciales en que dicha acción ha sido acogida, hasta el caso Yáñez Pavéz de 2011, como, asimismo, analizando la reforma constitucional de 2005, que dejó sin utilización la consideración la parte de la disposición constitucional que considera como parte de la hipótesis de error judicial el haber sido sometido a proceso, institución que desapareció del proceso penal con la introducción del proceso acusatorio, quedando en el ámbito de la responsabilidad judicial de error judicial solamente la condena por injustificada causa de error o arbitrariedad. Sin perjuicio de la existencia de responsabilidad administrativa del Estado por parte del Ministerio Público que debe ejercerse del mismo modo que las de carácter contencioso administrativo sin que tenga procedimiento especial.

Por nuestra parte, hacemos constar la disparidad de criterios que existen entre la Corte Suprema de Justicia que considera en la materia como criterio relevante la responsabilidad subjetiva del juez y los estándares mínimos explicitados por el sistema interamericano de reparación del daño por error judicial objetivo, que quedó reflejado en el acuerdo logrado en el caso La Calchona ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el Estado de Chile, comprometiéndose este último a modificar la norma constitucional.

Allan Brewer Carías se refiere a uno de los derechos políticos no reconocidos como tal en nuestro ordenamiento constitucional formal, el derecho a ser electo en cargos de elección popular, el que es considerado por el autor uno de los derechos políticos más esenciales. En tal perspectiva se analiza que los derechos políticos no son susceptibles de suspensión sino por sentencia condenatoria firme, lo que es asumido por la Constitución de Venezuela, al incorporar a los tratados de derechos humanos como la CADH con jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 23 de la misma. A su vez, el artículo 23 de la CADH que asegura y garantiza los derechos políticos en su numeral 1º, literal c), el derecho de ser electo para desempeñar cargos de elección popular, derechos que sólo pueden, de acuerdo al artículo 23.2 de la CADH ser restringidos sino por ley que establezca como sanción de un delito la pena de privación de derecho a ser elegido para cargos de elección popular, por condena emitida por un juez o tribunal penal competente, mediante un proceso penal, no pudiendo ser afectado el derecho a ser elegido por órganos administrativos del Estado.

Asimismo, se sostiene que las restricciones acorde al principio interpretativo rector en materia de derechos humanos “favor persona” los atributos de los derechos y sus garantías deben interpretarse en la forma que potencialicen el derecho y las restricciones o limitaciones a los mismos deben interpretarse en un sentido restrictivo y taxativo, a la luz de lo cual analiza el derecho venezolano. Por lo tanto el derecho de sufragio activo y pasivo no pueden ser afectados sino en los casos expresamente previstos por el artículo 23.2 de la CADH para los Estados partes de la misma, cuyo no respeto implicó la condena del Estado de Venezuela por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, en Sentencia de 1 de septiembre de 2011, por el hecho de establecer sanción de inhabilidad para desempeñar funciones electivas del Estado, por parte de la Contraloría General de la República, como órgano administrativo y no jurisdiccional sin las garantías del debido proceso y con vulneración de los derechos políticos exigidas por la CADH.

En tal sentido, es necesario en virtud del estándar establecido en la CADH y la jurisprudencia de la CIDH, que el Estado chileno revise el artículo 16 de la Constitución chilena, el cual suspende el derecho de sufragio por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena afflictiva o por delito que la ley califique de conducta terrorista.

Miguel Ángel Fernández G., aborda el tema acuciante del derecho de acceso a la información y el principio de publicidad contenido en el artículo 8º de la Constitución y su tensión con el derecho a la protección de la vida privada (art. 19 N° 4) y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (art. 19 N° 5), considerando la legislación de desarrollo de ambos principios constitucionales y la función que juega en la materia el Consejo para la Transparencia, el que como organismo estatal, de acuerdo al art. 5º, inciso 2º de la Constitución, no sólo tiene el deber de respetar sino también el deber de promover los derechos asegurados por la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes.

Liliana Galdámez Z., analiza la tarea desarrollada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tendiente a explicitar las víctimas de conductas delictivas que se ejercieron desde el Estado, valiéndose del poder del mismo y ocultando tales hechos, especialmente en el caso de desapariciones forzadas de personas, como forma paradigmática de dicho proceder. Dicha Comisión de Verdad y Reconciliación posibilitó conocer la conducta macrocriminal del Estado en los casos de graves violaciones de derechos humanos, posibilitando remover obstáculos, haciendo posible el acceso a la jurisdicción e imponiendo el deber de Estado de investigar, determinar responsables, sancionar y reparar, como exige el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Almonacid Arellano vs. Chile* al Estado Juez.

La labor de la Comisión Verdad y reconciliación permitió más allá de los casos concretos, comprender y explicar los patrones de conducta, sus causas y consecuencias, además de constituir un antídoto y prevenir nuevas situaciones similares con las recomendaciones de reformas institucionales y políticas, siendo un precedente fundamental para luego crear los mecanismos de reparación institucional.

La autora analiza en el artículo el contexto de tales violaciones sistemáticas de derechos humanos, la función de la Comisión de Verdad y Reconciliación, su adecuación a las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la materia y a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ámbitos más concretos y específicos de análisis constitucional encontramos los trabajos de Víctor Manuel Avilés, Emilio Pfeffer, José Antonio Ramírez y Jorge Mario Quinzio

Víctor Manuel Avilés en su artículo reflexiona sobre diversos aspectos generales del procedimiento administrativo y contencioso administrativo, como,

asimismo, sobre la aplicación de algunos principios del derecho sancionatorio administrativo y el debido proceso administrativo, destacando el aporte que ha realizado en la materia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, centrando su reflexión en materia del contencioso administrativo de carácter económico, relevando algunos de sus problemas jurídicos, para posibilitar un debate más profundo sobre la materia.

Emilio Pfeffer, analiza el tema de propiedad minera y royalty, analizando el sistema de propiedad minera en nuestro sistema constitucional, la función social de la propiedad y el royalty, planteando las distintas consecuencias jurídicas de considerar la regalía minera como un tributo o como precio o compensación por la explotación de un recurso minero no renovable de propiedad estatal.

José Antonio Ramírez el cual aborda el tema del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pasando revista al estatuto jurídico medio ambiental, deteniéndose en el análisis de la evaluación ambiental y la intervención de los distintos organismos estatales en ella y la configuración del sistema de Análisis de Impacto Ambiental en el sistema jurídico chileno.

Jorge Mario Quinzio en su artículo Universidad y Derechos Humanos, luego de hacer un recorrido acerca de la misión de la universidad y dentro de ella, el estudio, desarrollo y promoción de los derechos humanos como derechos universales, indivisibles y solidarios respecto de los cuales tiene obligaciones centrales, basadas en una ética objetiva y de una razón universal, que traspasa las soberanías nacionales. En la actualidad plantea el autor, no se entiende la civilización sin la noción de derechos humanos, correspondiendo a la comunidad universitaria y, en especial, a las facultades de derecho, la obligación de desarrollar un estudio profundo de los mismos, para expandirlos, socializarlos y posibilitar se ejercicio en el marco de un Estado democrático y de un efectivo Estado de Derecho.

Teodoro Rivera N., analiza la jurisprudencia y la práctica administrativa en materia de nacionalidad, con posterioridad a la reforma constitucional de 2005, considerando las innovaciones constitucionales y las obligaciones del estado en materia de Tratados internacionales relacionados con la materia, pasando revista a los distintos aspectos involucrados, su tramitación administrativa y la jurisprudencia que se ha concretado en la materia.

Asimismo, hay dos artículos que plantean una reflexión sobre el desarrollo democrático y el problema constitucional, como son los de Kamel Cazor A. y de Francisco Zúñiga U.

Kamel Cazor A., se plantea el análisis del problema constitucional y el desarrollo democrático en Chile, considerando que la reforma constitucional de 2005, mirada con los ojos actuales, resulta insuficiente, lo que requiere de un proceso democratizador profundo mediante un gran consenso en torno al sistema constitucional que se considera como más viable y a través de una nueva constitución gestada democráticamente, lo que tiene menos viabilidad y no se ha concretado nunca en Chile. El autor considera que el actual modelo institucional es de carácter estabilizador y con escasa participación democrática con una forma institucional que descansa en las elites políticas y no en la cultura democrática de la ciudadanía, lo que ha generado una cierta alienación política. El sistema democrático chileno sería un sistema democrático eficaz pero carente de la necesaria legitimidad democrática, carente de su función integradora, la cual sólo se cumple como fruto de un discurso racional en un proceso participativo, manteniéndose vigente el desafío como sociedad de estar a la altura de lo que proclama el artículo 4º de la Constitución: *Chile es una república democrática*.

Francisco Zúñiga U., en su artículo “Nuevos derechos y nueva constitución”, plantea que abordará el artículo asumiendo el positivismo normativista crítico, el constitucionalismo social y el constitucionalismo democrático, respecto del cual se plantea respecto de la Constitución del Bicentenario considerando la necesidad de una nueva legitimidad democrática de origen, la apertura del techo ideológico de la Constitución, una nueva constitución económica social basada en el estado social, el perfeccionamiento de la participación democrática con mecanismos de democracia semidirecta y reforzando los controles del poder, el perfeccionamiento de las autonomías funcionales y territoriales y ampliando el catálogo de derechos, deberes y garantías constitucionales. El autor asume la necesidad de que la nueva Constitución surja de una asamblea constituyente elegida al efecto.

Finalmente, en una perspectiva mexicana, Jorge Carpìzo, analiza el tema de la reforma constitucional en México, considerando ésta en las constituciones anteriores a la vigente y concentrándose en la Carta Fundamental de 1917, analizando los procedimientos de reforma constitucional contemplados constitucionalmente y las distintas reformas concretadas hasta 2010, haciendo un balance de ellas y determinando a su juicio aquellas que han sido convenientes e inconvenientes para México, como, asimismo, considerando las reformas que deberían concretarse en el sistema institucional. Asimismo, analiza las mutaciones constitucionales ocurridas en el desarrollo de la evolución constitucional mexicana con el texto vigente desde la Constitución de 1917.